

amplios apoyos de masas y de un explícito programa de gobierno, y por tanto a estar mejor preparados para forjar relaciones más estrechas y más transparentes entre Estado y sociedad. Aun cuando la numerosa población extranjera —un grupo presente en todo el espectro social, aunque probablemente más importante entre las clases medias— fue excluida del derecho al sufragio, el carácter objetivamente democratizador de la nueva legislación resulta evidente.

La era radical

Una vez sancionada la Ley de Sufragio Obligatorio y Secreto, muchos dirigentes oficialistas se manifestaron convencidos de que el partido gobernante alcanzaría la victoria y que, en todo caso, las agrupaciones que lo desafiaran en las urnas (radicales, socialistas, católicos) deberían competir por la representación minoritaria reservada a la oposición. Sin embargo, las credenciales del PAN como el gran partido de gobierno que había hecho posible el progreso argentino no fueron suficientes para asegurarle ese lugar de privilegio una vez que el sufragio obligatorio y secreto comenzó a regir los comicios. Las fuerzas oficialistas lograron retener su primacía por algunos años en el interior tradicional; en las regiones más modernas del país, en cambio, experimentaron una rápida erosión. Entre 1912 y 1915, los radicales ganaron las gobernaciones de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y disputaron con los socialistas por la supremacía en la capital federal. En las elecciones nacionales de abril de 1916, las primeras verdaderamente libres de la historia del país, el partido fundado por Alem obtuvo cerca del 46 por ciento de los

sufragios; seis meses más tarde, su máxima figura, Hipólito Yrigoyen, asumía la presidencia. El radicalismo recogió adhesiones tanto en medios rurales como urbanos, y a través de todo el espectro social, aunque su base de sustentación más firme se encontraba entre las clases medias y populares de la región pampeana. En el lapso de unos pocos años, pues, la reforma echó por tierra una hegemonía de más de treinta años. Sobre sus cenizas se erigió una nueva fuerza dominante, el radicalismo, que rigió los destinos del país hasta que fue derrocado por un levantamiento armado en septiembre de 1930.

La derrota del PAN reconoce distintos motivos. El PAN debió encarar el supremo desafío del sufragio honesto sin el auxilio de sus grandes figuras: para 1916 Roca, Pellegrini y Sáenz Peña habían fallecido. Faltas de orientación desde la cumbre, las fuerzas autonomistas concurren a la contienda presidencial con dos candidaturas rivales entre sí, las de Lisandro de la Torre y Marcelino Ugarte, que se hostilizaron mutuamente a lo largo de la campaña electoral. De todos modos, el hecho de que experimentaran importantes fracasos en el nivel provincial y municipal sugiere que sus problemas no radicaban solamente en sus dificultades para coincidir en una fórmula presidencial. Por una parte, la legitimidad del PAN se había visto hondamente afectada por la falsificación electoral. Este fenómeno no era quizás decisivo en muchos distritos del interior, pues allí la dirigencia autonomista gozaba de influjos y prestigios que, aunque no siempre vinculados a las prerrogativas de los grupos social y económicamente más poderosos, de todas maneras se hallaban fuertemente imbricados en la sociedad local. Pero en las grandes ciudades del litoral, donde la independencia del electorado era mayor, y donde desde comienzos de siglo

habían imperado las formas más groseras y mercantilizadas del fraude, la falsificación de la voluntad popular concitaba un amplio rechazo en la prensa y en la opinión pública, que puso en entredicho la legitimidad del dominio autonomista.


Finalmente, la derrota del PAN también fue consecuencia de las dificultades que enfrentó una organización ya madura, caracterizada por una cultura en la que tenían un peso dominante los notables de la política elitista, para adaptarse a un escenario que tras la reforma se tornó más popular y más plebeyo. Más que la emergencia de partidos de ideas —como el Partido Demócrata Progresista, con el que Lisandro de la Torre aspiraba a recuperar lo mejor del oficialismo para dar vida a un partido liberal y progresista—, el nuevo contexto favorecía a las agrupaciones capaces de interpelar y seducir a las masas. Con la sanción del sufragio compulsivo, la participación rápidamente saltó de menos del 15 por ciento a más del 50 por ciento del padrón, para superar el 80 por ciento hacia el final de la década de 1920. Tras la reforma, el éxito dependió menos del atractivo de un programa o una ideología que de la capacidad de los partidos para trascender el universo de las formas de sociabilidad política conocidas —los clubes de notables, las logias masónicas, la prensa, las clientelas electorales— para interpelar a vastos contingentes de votantes, hasta entonces escasamente politizados. Dado que la práctica efectiva del sufragio había desempeñado un papel secundario en la cultura política del país, las fuerzas partidarias debieron ir al encuentro de una población que permanecía mayoritariamente al margen de la competencia electoral (y en muchos casos también de la vida política como un todo), pero que ahora resultaba imperioso interpelar.



Para encarar la laboriosa tarea de movilizar este electorado para el que el voto aparecía como una concesión antes que como una conquista, las fuerzas partidarias debieron transformarse profundamente. En esos años, todos los partidos se vieron impulsados a crear redes de comités locales a partir de los cuales encarar una vasta y exigente tarea proselitista, que debía ir más allá de sus tradicionales clientelas electorales (que, por cierto, también crecieron en este periodo). Como parte de este proceso, se incrementó la importancia de los agentes políticos capaces de interpelar públicos más extensos y, en particular, de sintonizar con las preocupaciones y aspiraciones de los sectores populares que, ahora, se habían movido hacia el centro de gravedad de la escena política. En el pasado, los dirigentes populares y las estructuras partidarias habían desempeñado un papel relevante en el reclutamiento de votantes, pero su importancia siempre se había visto acotada por el carácter limitado, y muchas veces fraudulento, de la competencia en los comicios. Aunque el cambio no se produjo de la noche a la mañana, luego de 1912, cuando el éxito político pasó a depender más directamente de la capacidad de reclutar seguidores y atraer votos, la importancia de los políticos populares y de las estructuras partidarias se reveló cada vez mayor. Así pues, en el nuevo escenario democrático creció la importancia del clientelismo político, pero más aún de la capacidad de atraer públicos poco politizados. Al ritmo impuesto por los resultados en las urnas, también se produjo un importante recambio generacional —y hasta cierto punto social— de la dirigencia, visible tanto en el radicalismo como en la oposición.

Dentro de las fuerzas autonomistas —que entonces comenzaban a llamarse conservadoras— se produjeron algunos





intentos fructíferos para adecuar su estructura y su programa al escenario democrático, como los que protagonizaron los dirigentes de Avellaneda, el principal suburbio obrero de Buenos Aires. Sin embargo, el peso de la tradición y la incidencia de liderazgos forjados en el periodo anterior aco- taron estas transformaciones. La Unión Cívica Radical fue más exitosa, y de hecho se adaptó mejor que cualquier otra agrupación a un nuevo contexto impuesto por una súbita expansión del electorado y, bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen, se convirtió en el primer partido de masas de la historia argentina. Desde el cambio de siglo, el radicalismo se había mantenido al margen de la competencia partidaria, reducido a poco más que una secta política unida en torno al reclamo de elecciones honestas. Resulta difícil evaluar su influjo durante el periodo en el que permaneció en las sombras, pero el anémico levantamiento armado que protagonizó en 1905 sugiere que todavía entonces estaba lejos de constituir una organización poderosa. Para entonces, sin embargo, ya estaba en camino de constituirse en el gran impugnador moral del régimen oligárquico. La aprobación de la Ley Electoral de 1912 lo obligó a salir del encierro voluntario en el que se había mantenido por más de una década, y desde entonces no cesó de sumar adeptos agitando la bandera del sufragio honesto y denunciando la corrupción y la ilegitimidad del régimen gobernante. Su crecimiento debió mucho al extraordinario talento político de su líder Yrigoyen, una figura que poseía un enorme magnetismo personal a la vez que grandes destrezas organizativas y una gran avidez por sumar nuevos reclutas a su causa.

Yrigoyen representó un tipo de liderazgo popular muy peculiar, que marcó hondamente a la organización, sobre

la que ejerció hasta su muerte un ascendiente sin rival. Nacido a la vida política en la etapa de luchas facciosas previas a 1880, el líder radical demostró una rara habilidad para adaptarse a la era de la política de masas, y para convertir lo que hasta entonces había sido una modesta fuerza de oposición en una gran maquinaria electoral primero y en un partido de gobierno después. Yrigoyen forjó su prestigio como un dirigente enigmático y huidizo, que prefería el contacto cara a cara y rehuía la palabra y la exposición públicas (lo que le valió el sobrenombre de «El Peludo»). El jefe radical construyó su figura de líder como la de un hombre que vivía humildemente, consagrado sin descanso a asegurar el triunfo de un partido que identificaba con las fuerzas positivas de la nación. Su visión de la política argentina como escindida en dos universos irreconciliables —por una parte, la «causa» encarnada por la UCR; por la otra, el «régimen» que conformaban las fraudulentas fuerzas que habían gobernado el país desde 1880— contribuyó a reafirmar la idea de la nación política como unidad, y de la UCR como único representante verdadero del interés colectivo. De acuerdo con esta lógica, en el largo periodo en el que constituyó la principal figura del partido gobernante se acentuaron dos rasgos ya antiguos en la cultura política nacional: por una parte, la tendencia a la división y la polarización; por la otra, el rechazo a toda forma de acuerdo o negociación entre agrupaciones que se negaban legitimidad mutuamente. Por cierto, el imperio de esta visión moralista y binaria del conflicto político, que veía en las fuerzas conservadoras pura negatividad, no fue obstáculo para que Yrigoyen acogiese en el seno del radicalismo a un importante número de dirigentes de segunda fila, que desertaron de las agrupaciones

opositoras buscando sobreponerse a la declinación que ésas experimentaron en la era democrática. De hecho, en las elecciones nacionales de 1916 la migración de los conservadores hacia el radicalismo resultó crucial para asegurar el triunfo de Yrigoyen en muchas provincias del interior.


El impacto de la participación popular ya en el comienzo de la era democrática se puso de manifiesto en el mismo momento en el que Yrigoyen arribó a la Casa Rosada, acompañado por una multitud nunca vista en un acto de asunción presidencial; algunos de los presentes soltaron los caballos y arrastraron personalmente el carruaje que transportaba al primer mandatario. Este espectáculo puso de relieve la emergencia de una nueva cultura política, decididamente más plebeya, que causó disgusto y preocupación en las élites políticas e intelectuales tradicionales y en las clases propietarias. Este fenómeno se vio acentuado, pues con la democratización las élites intelectuales perdieron gran parte del influjo sobre la cumbre del Estado del que habían gozado durante la república oligárquica, cuando los déficits de legitimidad democrática de la clase dirigente la volvían más propensa a reconocer la autoridad de los hombres de ideas. Con el triunfo del sufragio universal, pues, la política se tornó más popular y más hostil hacia las formas de prestigio y autoridad consagradas por el antiguo régimen. Hay que señalar, sin embargo, que pese a estos cambios los gobernantes surgidos de las urnas no mostraron interés en alterar los acuerdos sociales que habían hecho posible el formidable crecimiento que la economía de exportación había experimentado durante las cuatro o cinco décadas de vida que acumulaba el proyecto liberal, cuyos progresos en el terreno social y cultural apreciaban tanto los líderes radicales como sus rivales.



Por otra parte, el hecho de que las nuevas autoridades insistiesen en que la causa de la reparación política constituía su principal objetivo, muchas veces los instó a comportarse como administradores aún más austeros y más ortodoxos que sus antecesores oligárquicos. Durante el primer gobierno de Yrigoyen, además, la moderación en el gasto constituyó también una necesidad impuesta por las serias restricciones que experimentaron las finanzas públicas como consecuencia de los desajustes provocados por la I Guerra Mundial.



Amén de afectar al comercio internacional y al flujo de inversiones, la Gran Guerra provocó un deterioro muy marcado de los salarios, así como elevadas tasas de desocupación. Estas privaciones dieron origen a un largo ciclo de huelgas que comenzó en 1917 y se prolongó hasta 1921, que por su intensidad y envergadura no tendría igual en la Argentina preperonista. Un contexto ideológico inédito, marcado por el triunfo de la Revolución Rusa y el ascenso de fuerzas insurreccionales en todo el oeste y centro de Europa, le otorgó a los reclamos obreros un dramatismo excepcional, que concitó grandes temores entre las clases medias y altas. El nivel de organización de los conflictos desatados en esos años puso de relieve que el mundo del trabajo había alcanzado un nivel de articulación desconocido durante el periodo de apogeo anarquista de la primera década del siglo. Con todo, su punto culminante, la Semana Trágica de enero de 1919 en Buenos Aires, mostró los límites de una organización sindical que, a lo sumo, estaba en condiciones de encuadrar a uno de cada cuatro o cinco trabajadores. La Semana Trágica —el peor episodio de violencia social de la primera mitad del siglo xx— comenzó cuando la indignación ante el asesinato, a manos de las fuerzas del orden, de algunos obreros de los






talleres metalúrgicos Vasena convirtió un conflicto puntual en una huelga general, en la que pronto la espontaneidad y la emotividad desempeñaron un papel más relevante que la organización sindical. La huelga fue seguida por una dura represión estatal, en la que colaboraron activamente grupos civiles. El hecho de que estos últimos concentrasen su furia sobre la comunidad ruso-judía, a la que se acusó de impulsar un complot comunista, resulta indicativa tanto de los desmedidos temores que ganaron a amplios sectores de clase media y alta como de la modestia relativa del desafío obrero.

Y es que a pesar de sus progresos, en la posguerra el sindicalismo todavía constituía un actor secundario en el escenario político. Al igual que a comienzos de siglo, la organización sindical tenía sus puntales en los grandes gremios de servicios estructurados nacionalmente y vinculados a la economía exportadora, particularmente en los portuarios y los ferroviarios. Desde allí extendía su ascendiente hacia otros sectores de actividad, donde sólo existían grupos de activistas cuya influencia rara vez abarcaba al conjunto de la población trabajadora. Tras la Gran Guerra, el poder de convocatoria de la dirigencia gremial de signo clasista, aunque mayor que en cualquier otro país latinoamericano, seguía siendo modesto para los estándares de los países industrializados de la Europa Occidental. Muchos asalariados veían con entusiasmo el camino del ascenso social individual o se sentían interpelados por identidades como la étnica y, cada vez más, la nacional (que ganaba terreno en una población obrera en la que el predominio de los extranjeros lentamente comenzaba a retroceder). En parte como resultado de la creciente importancia de los trabajadores nativos, y una vez que el polvo de esos años de violencia social y esperanzas revolucionarias




comenzó a asentarse, se advirtió que el movimiento obrero tomaba distancia del ideal insurreccional y comenzaba a abrazar posiciones que lo reconciliaban con el orden existente. De hecho, en pocos años se hizo claro que el sindicalismo comunista, nacido en 1920 y pronto afiliado a la Tercera Internacional, quedaba como el único portaestandarte de la bandera revolucionaria en el mundo del trabajo argentino.

La fuerza que mejor simbolizaba la toma de distancia respecto del ideal revolucionario fue el pragmático «sindicalismo revolucionario», la más exitosa de cuantas pugnaron por orientar al movimiento obrero en el periodo de entreguerras. Contra lo que indica su nombre, esta corriente desarrolló su actividad cada vez más despojada de una perspectiva insurreccional (y más en general política), y concentrando sus energías en la construcción de estructuras sindicales a partir de las cuales incrementar el poder de negociación de los asalariados. Las organizaciones sindicalistas no mostraron reparos en dialogar y negociar con el empresariado. Fueron, sin embargo, celosos defensores del principio de autonomía obrera, y por ello nunca demostraron interés en impulsar un programa de reformas laborales supervisado por el Estado, que inevitablemente habría recortado la independencia de sus organizaciones. Sin embargo, esta corriente buscó el apoyo de las autoridades toda vez que la intercesión oficial podía volcar un conflicto en su favor. Para los representantes de los trabajadores, el creciente atractivo de esta estrategia que estrechaba lazos con el Estado era en parte resultado del nuevo escenario que se abrió con la reforma electoral de 1912 que, al incluir más centralmente a las clases populares nativas en la vida electoral, permitía intercambiar concesiones laborales o respaldo en los conflictos gremiales por apoyo



electoral. La gradual nacionalización de los trabajadores y el importante incremento en el bienestar popular que tuvo lugar tras la crisis de la posguerra, y que se prolongó durante casi toda la década de 1920, operó en el mismo sentido, pues poco a poco le restaron atractivo a las posiciones anarquistas que tanta importancia habían tenido entre los trabajadores inmigrantes del cambio de siglo, favoreciendo su reemplazo por posturas más respetuosas del orden social que podían ser mejor atendidas por las autoridades.

El gobierno radical se convirtió en un promotor de este sindicalismo apolítico y de negociación, cuyo ascenso estimuló no sólo porque le permitía dotarse de aliados en el mundo del trabajo, sino también porque de este modo estrechaba el margen de maniobra de las declinantes organizaciones anarquistas y de los algo más dinámicos gremios orientados por el Partido Socialista. Para la izquierda parlamentaria, la democratización trajo tanto beneficios como problemas. Con el sufragio obligatorio, el socialismo incrementó su caudal electoral en las grandes ciudades del litoral y particularmente en la capital federal, cuyo dominio disputó con el radicalismo. La influencia socialista también creció entre los trabajadores organizados del mundo urbano, aunque más modestamente, y sin amenazar el predominio de las organizaciones sindicalistas. En el interior del país y en la campaña pampeana, empero, el socialismo nunca logró echar raíces. Este escenario dejó en una posición minoritaria a los principales promotores de un programa comprensivo de reformas laborales y sociales a desarrollarse por la vía legislativa. Privado de sustento, tanto en un gobierno que aprendió a sacar ventajas de su capacidad de arbitrar informalmente en los conflictos laborales, como entre organizaciones






sindicales celosas de su autonomía, los éxitos del reformismo en el terreno social y laboral fueron particularmente modestos a lo largo de los catorce años que duró la primera experiencia democrática argentina.



Pese al tono moderadamente progresista que imperó en el debate parlamentario y en la discusión pública, este periodo no supuso un avance sustancial en la sanción de legislación destinada a regular la vida económica y social. Así pues, una vez superada la etapa de agudos conflictos sociales que acompañó al fin de la Gran Guerra, y pese a la creciente complejidad alcanzada por la sociedad argentina, la vida política continuó girando en torno a dilemas específicamente políticos, entre los cuales el de mayor relevancia se refiere al impacto de la democratización sobre la competencia partidaria y el control del Estado. De hecho, a lo largo de todo el periodo que corre hasta el derrocamiento de Yrigoyen en 1930, las divisiones partidarias y el debate público tomaron cada vez más la forma de una confrontación entre oficialismo y oposición que, poco a poco, fue subsumida por la oposición entre yrigoyenistas y anti-yrigoyenistas. La vigencia de estas denominaciones indica que el personalismo, ese rasgo ya presente en la etapa oligárquica, mantuvo su vigencia en la era democrática, otorgándole un matiz peculiar a la competencia política.

Al asumir la presidencia, Yrigoyen dejó claro que no reconocía legitimidad alguna a los herederos políticos del antiguo régimen, y desde entonces empleó todos los instrumentos que la primera magistratura colocaba a su disposición para desplazar a los conservadores de las posiciones que ocupaban, a su juicio indebidamente, en los gobiernos provinciales y en el Parlamento. En sus primeros dos años de





gobierno, Yrigoyen decretó intervenciones federales en ocho provincias gobernadas por administraciones conservadoras, entre las que se contaba Buenos Aires. La posición electoral del radicalismo se afirmó gracias al desplazamiento de estos rivales, y ya para 1918, el oficialismo se convirtió en la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, donde los escaños se renovaban cada nueve años, el asedio a las posiciones conservadoras fue más lento y dificultoso, pero la dirección del cambio resultó igualmente inequívoca. La universidad, otro bastión opositor, también sufrió el embate de los nuevos tiempos. Gracias al apoyo presidencial, en 1918 triunfó un movimiento reformador promovido por el estudiantado que reclamaba una renovación del cuerpo de profesores —un estamento de signo predominantemente conservador—, así como mayor participación estudiantil en el gobierno de las casas de estudios.



Sometidas a un hostigamiento continuo, y a la vez afectadas por su progresiva declinación electoral, las fuerzas conservadoras acusaron al gobierno de atentar contra las instituciones de la República y de traicionar el programa de Sáenz Peña. También denunciaron el «obrerismo» y las prácticas clientelistas con que el partido gobernante reclutaba seguidores y —a su juicio— falsificaba la voluntad popular, y crecientemente, también la falta de madurez del electorado. Sin embargo, nunca le volvieron la espalda a la idea de que el vasto proceso de cambio político y social que la Argentina había recorrido en el medio siglo previo debía culminar en la construcción de una democracia auténtica. En alguna medida, empero, los conservadores reaccionaron contra fenómenos que, aunque no se ajustaban a sus ideales y expectativas, eran resultado del propio proceso de democratización.






Pues al incorporar a las mayorías de modo más pleno a la vida pública, la democratización obligó a los gobernantes a contemplar más directamente las demandas de una ciudadanía que, aun si movilizada a través de estructuras partidarias que canalizaban de modo selectivo las demandas que recibían desde el llano, se tornaba más activa y más participativa de lo que estos grupos se hallaban tradicionalmente acostumbrados a tolerar.

El irrefrenable ascenso radical resultó aún más difícil de aceptar para los partidos modernizadores (también llamados de ideas), como el Partido Demócrata Progresista y, particularmente, para el socialismo. En su momento, la fuerza conducida por Juan B. Justo había visto a la reforma electoral como una gran oportunidad para acelerar la formación de un electorado educado en la política de los intereses de clases a partir de la cual reemplazar a las agrupaciones personalistas por auténticos partidos de ideas. Sin embargo, luego de un comienzo auspicioso, el caudal electoral socialista se estancó, mientras el radicalismo crecía en el favor popular y, lo que era aún peor, lo hacía recurriendo a los instrumentos de la política criolla que los socialistas tanto denigraban. Así pues, los socialistas, que se habían preparado para conducir a las masas argentinas en la era de la verdad electoral, descubrieron que ese papel le estaba reservado a un partido sin programa explícito y sin principios claros, y al que en consecuencia consideraban muy similar a las fuerzas oligárquicas.

Las tensiones que introdujo el ascenso de Yrigoyen terminaron por desgarrar al propio partido Radical. Durante su mandato, algunos sectores del partido comenzaron a mostrar su insatisfacción con lo que describían como el avasalla-





miento, por parte del presidente y su núcleo de seguidores, de los ideales de pureza cívica que formaban parte central de la tradición radical. Estas críticas provenían, en muchos casos, de notables de larga trayectoria en el partido. Cuando Yrigoyen dejó la presidencia y en su lugar fue ungido su discípulo Marcelo T. de Alvear, estas disputas encontraron mayor espacio para expresarse. Durante su paso por la presidencia (1922-1928), Alvear tomó distancia de su antecesor y procuró desempeñar un papel de equilibrio entre el ex presidente y sus detractores, pero fracasó en sus esfuerzos y la división del radicalismo terminó dando lugar a dos nucleamientos rivales, los personalistas y los antipersonalistas, ya claramente definidos para 1924. Los seguidores de Yrigoyen retuvieron la mayoría del partido y el control del Parlamento, por lo que importantes sectores del antipersonalismo abandonaron el radicalismo y se acercaron a la oposición conservadora. En la elección de renovación presidencial, la principal fórmula opositora, denominada Confederación de las Derechas, fue encabezada por Leopoldo Melo y Vicente Gallo, dos antipersonalistas de nota.

Pese a estas defecciones, en 1928 Yrigoyen retornó al gobierno luego de un aplastante triunfo electoral. En la elección más concurrida desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, el radicalismo arrolló a todas las fuerzas de la oposición y cosechó el 57 por ciento de los sufragios. Comenzó de este modo el tercer mandato consecutivo de un partido al que la oposición condenaba rabiosamente, pero al que con impotente resentimiento percibía como imbatible en las urnas. Si bien el yrigoyenismo siguió recibiendo apoyos en un amplio espectro social, tras el éxodo de los antipersonalistas el partido cobró un cariz aún más popular que en el pasado, que se

vio reflejado tanto en el perfil de sus dirigentes como en el estilo y los temas de la campaña electoral. No sorprende, pues, que la denuncia del yrigoyenismo, extendida entre los integrantes de las élites económicas y sociales, también ganase terreno en importantes franjas de las clases medias, que entonces se revelaron muy sensibles al discurso que condenaba los aspectos populistas y plebeyos del gobierno radical. Este último fenómeno reconocía motivos específicos vinculados a los sucesos de esos años, pero también otros más generales que remiten a la posición secundaria que las clases medias terminaron ocupando en la escena política de la república democrática. Para estos sectores, en su momento marginados por el régimen oligárquico, la reforma sólo supuso una mejora muy relativa de su posición en la esfera política, pues la abrupta ampliación que tuvo lugar como consecuencia de la sanción del sufragio obligatorio desplazó el centro de gravedad del sistema político hacia las clases populares. Cuando la gran crisis de 1929 se abatió sobre la Argentina, un creciente malestar rápidamente ganó a importantes franjas de las clases medias, que culparon al gobierno de concentrar todas sus energías en la política menuda, mientras permanecía indiferente ante las consecuencias de la depresión económica. Ese mismo año, el gobierno sufrió algunos retrocesos electorales y, en marzo de 1930, una humillante derrota en la capital federal a manos del Partido Socialista Independiente, una escisión de la derecha del socialismo que montó una furiosa campaña llamando a derrocar al gobierno. Sensible al signo de los tiempos, la prensa popular también se volcó contra el gobierno.

En este contexto marcado por el impacto de la crisis y el ascenso de la agitación opositora, una pequeña pero ague-


rrida derecha antidemocrática que había nacido junto a la democracia, y sobre la que pesaba también la influencia del catolicismo antimoderno, experimentó un breve pero significativo momento de gloria. Durante los años de intensa conmoción social que acompañaron el fin del conflicto bélico, la más importante de estas agrupaciones, la Liga Patriótica, había cosechado importantes apoyos en las clases altas y medias, tanto en el campo como en la ciudad, y también entre el cuerpo de oficiales del ejército. El retorno de la paz social durante la presidencia de Alvear le restó urgencia a los llamados a defender la patria y el orden contra el peligro revolucionario, y desde entonces la nueva derecha vio contraerse su séquito. Críticos con la reforma de Sáenz Peña, sus militantes reivindicaban el uso de la violencia como arma política, pero tenían en mente más un retorno al pasado que una apertura a movimientos autoritarios de tipo fascista (que podía significar, más que un desplazamiento, una victoria aún más completa de la política de masas). De hecho, la corriente más influyente dentro de este movimiento terminó abrazando un proyecto que apuntaba a la restauración de una república expurgada de los vicios populistas que la democratización había traído consigo. En el cargado clima que caracterizó a la segunda presidencia de Yrigoyen, los militantes del nacionalismo antidemocrático finalmente encontraron un contexto propicio para desplegar su acción de propaganda. Aunque sus posiciones eran bastante más extremas, y en el largo plazo incompatibles con las que voceaba la oposición conservadora y las que nutrían los sentimientos de importantes franjas de las clases medias y altas, en esas especiales circunstancias terminaron unidos por el deseo de poner fin al gobierno radical.



Estos actores confluyeron en el alzamiento cívico-militar de 1930. El 6 de septiembre de ese año, José F. Uriburu, un oficial retirado de abiertas simpatías por el régimen corporativo que poseía cierto ascendiente sobre los grupos de la nueva derecha, se puso al frente de un modesto levantamiento militar. En las primeras horas de ese día, luego de sublevar la escuela de cadetes que se hallaba ubicada a algunos kilómetros de la capital, el general Uriburu marchó hacia la Casa Rosada. A la pequeña columna rebelde se sumaron unos pocos oficiales en actividad y algunos dirigentes conservadores y nacionalistas. El ejército, en cuyo cuerpo de oficiales las simpatías por el radicalismo eran mayoritarias, permaneció al margen del alzamiento. En su marcha hacia la sede del gobierno, los sublevados recibieron el respaldo de un considerable número de habitantes. Quienes salieron a vivir a los insurrectos eran, en su mayoría, integrantes de los estratos medios. Pocas horas más tarde, el gobierno se derrumbó sin resistencia, quebrado más que por la envergadura del desafío armado, por el eco que el levantamiento concitó entre la población urbana.

Caído Yrigoyen, Uriburu inauguró una dictadura militar de futuro incierto. Las tensiones políticas que suscitó el experimento democrático acabaron con medio siglo de estabilidad constitucional, y colocaron a la clase dirigente argentina ante dilemas para los que no tenía respuestas. En efecto, en pocos meses se advirtió que el proyecto autoritario que animaba a Uriburu y a sus aliados de la nueva derecha no contaba con los apoyos necesarios para ponerse en marcha. A partir de ese momento, la iniciativa política recayó en la dirigencia conservadora que se había sumado al golpe contra Yrigoyen pero que, fiel a las convicciones con que se había





forjado su ideario en el siglo previo, seguía imaginando el futuro en el marco de una república democrática y liberal. Pero la restauración del imperio del sufragio sólo se volvía plenamente aceptable para estos grupos si permitía la construcción de un orden político que, expurgado de los vicios populistas que le achacaban al gobierno radical, los reconociese como sus conductores. Para ello, sin embargo, era necesaria la marginación del radicalismo, que seguía constituyendo la principal fuerza electoral del país. En un escenario en el que tanto la dictadura como la restauración democrática se mostraban inviables, la Argentina comenzaría un nuevo drama signado por el fraude electoral.

